

Otro fraude no aislado

El informe de Contraloría que ha develado una cruda realidad (más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país durante sus licencias médicas) ha generado al mismo tiempo una ola de críticas y preocupación por su impacto en la ética pública, el gasto fiscal (se estiman pérdidas de 350 millones de dólares al año) y la confianza en el sistema de salud. Dentro de las instituciones más afectadas por este revelador informe están la JUNJI e Integra, organismos justamente dedicados a la educación de la primera infancia.

En Codelco y BancoEstado también figuran trabajadores que usaron licencia médica para vacacionar, sin duda que hablar de licencias médicas falsas es hablar de un fraude económico y ético inaceptable.

Así mismo, organismos de salud y las fuerzas armadas suman aproximadamente un 20% de casos que deberán ser objeto de sumarios para el reintegro de los recursos públicos, y para (esperamos) la aplicación de duras sanciones a los infractores. Desde mi perspectiva, quienes hayan incurrido por única vez en este inmoral acto, deben sufrir sanciones en lo administrativo y económico, pero debiesen poder seguir en sus funciones condicionalmente. En cambio, quienes sean reincidentes deben automáticamente ser desvinculados del sistema público.

Pero el problema no solo es de los funciona-

rios públicos aludidos. También el grave problema se extiende al sector privado, pues hay aproximadamente 1.500 médicos que estarían involucrados en la emisión fraudulenta de licencias médicas, causando con ello pérdidas millonarias para el sistema de subsidios de incapacidad laboral.

Si bien la superintendente de Seguridad Social, Pamela Gana, ha señalado que ellos no están para fiscalizar cada licencia, sí deben poner alertas cuando visualicen que hay profesionales de la salud que están emitiendo licencias a diestra y siniestra. La superintendente anda más preocupada de las marcas de las mutualidades que de realizar el principal trabajo, que es el de velar por el buen uso de los recursos públicos en el ámbito de la salud.

Por ello, encontramos prudente y razonable que la Contraloría General de la República haya iniciado un sumario administrativo en la propia Superintendencia de Seguridad Social, en el Compin y en Fonasa para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondiese realizar a dichas entidades en esta materia.

Lo más grave, aparte del fraude al fisco que esta situación de licencias médicas genera, es la percepción de que en el país miles de personas ven como algo socialmente aceptable presentar licencias médicas falsas, lo que refleja una peligrosa normalización cultural de esta mala práctica.